

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	APELACIÓN AUTO
DEMANDANTE	PIEDAD MARÍA LOAIZA MARÍN
DEMANDADOS	PORVENIR S.A.
PROCEDENCIA	JUZGADO DIECINUEVE LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05-001-31-05-019-2015-01593-02
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN DEMANDANTE
TEMAS Y SUBTEMAS	AGENCIAS EN DERECHO – Acuerdo 1887 de 2003
DECISIÓN	CONFIRMA

AUTO INTERLOCUTORIO No.027

Medellín, catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA QUINTA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta No. 059 de 2022, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra el Auto del 3 de agosto de 2022, emitido dentro del Proceso Ordinario Laboral adelantado por **PIEDAD MARÍA LOAIZA MARÍN** contra **PORVENIR S.A.**

ANTECEDENTES

Mediante Sentencia General No. 483 del 29 de noviembre de 2018, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito condenó a **PORVENIR S.A.** a reconocer y pagar en favor de la señora **PIEDAD MARÍA LOAIZA MARÍN** la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su hijo, señor Carlos Alexander Ríos Loaiza, a partir del 21 de julio de 2014, en cuantía equivalente a UN (1) SMLMV, imponiéndole a la demandada la obligación de cancelar la suma de \$40.206.023 por concepto de retroactivo pensional causado hasta el 30 de noviembre de 2018. Seguidamente, fulminó condena en contra de la pasiva por los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados desde el 25 de noviembre de 2014 hasta el pago de lo adeudado. Igualmente, condenó en costas a **PORVENIR S.A.**, precisando que las agencias en derecho a su cargo corresponderían al 15% del retroactivo ordenado, más la suma equivalente a un (1) SMLMV (f. 293 a 297 Archivo 01 ED Cuaderno C01).

Dicha providencia fue modificada por el Tribunal Superior de Medellín– Sala Laboral, mediante Sentencia del 28 de noviembre de 2019, precisando que el retroactivo en favor de la actora, generado entre el 21 de julio de 2014 hasta el 31 de octubre de 2019,

ascendía a \$49.247.892. Así mismo, adicionó la decisión en el sentido de autorizar a la accionada a descontar de las sumas a pagar lo correspondiente por aportes al sistema de salud. Condenó a la demandada en costas de segunda instancia, y fijó como agencias en derecho la suma de \$828.116 (Archivo 02 ED Cuaderno C02).

Posteriormente, en sede casacional, a través de la Sentencia SL2031-2022 de la Sala de Descongestión No. 3 de la Sala de Casación Laboral de la CSJ, se dispuso no casar la sentencia de segundo grado, condenando en costas a la AFP demandada, junto con las agencias en derecho cuantificadas en \$9.400.000 (f. 15 a 29 Archivo Cuaderno C03).

Efectuada la liquidación de agencias en derecho según consta en el informe secretarial del 3 de agosto de 2022 (f. 298 Archivo 01 ED Cuaderno C01), se fijaron estas en la suma de **\$18.396.542** a cargo de la demandada **PORVENIR S.A.**, discriminadas por instancia así:

PRIMERA INSTANCIA	\$8.168.426
SEGUNDA INSTANCIA	\$828.116
CASACIÓN	\$9.400.000
TOTAL COSTAS A CARGO DE PORVENIR	\$18.396.542

Dicha liquidación fue aprobada mediante Auto del 3 de marzo de 2022 (f. 298 a 299 Archivo 01 ED Cuaderno C01).

RECURSO

La apoderada de la PARTE **DEMANDANTE** presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el auto anterior argumentando que, de conformidad con el parágrafo del numeral 2.1.1 del artículo 6° del Acuerdo 1887 de 2003 “(...) *Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes (...)*”, al igual que, presupone dicha reglamentación, que la condena en costas podrá ser hasta del 25% del valor de las pretensiones reconocidas, y, en el caso de reconocer obligaciones de hacer, podrá incrementarse hasta cuatro (4) SMLMV. Por lo anterior, señaló que las pretensiones líquidas concedidas en las sentencias de primera y segunda instancia se cuantificaron en la suma de \$49.247.892 por concepto del retroactivo pensional, con base en el cual las agencias deben tasarse hasta un 25%, lo que la lleva a solicitar su reajuste.

Así mismo, indicó que, como el objeto del proceso versaba sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, esta corresponde a una prestación periódica, motivo por el que las agencias deben ser calculadas hasta veinte (20) SMLMV.

Con base en todo lo anterior, insistió en la aplicabilidad del precepto legal en comento, manifestando que la suma reconocida por agencias de primera instancia no guarda armonía con los límites máximos mencionados, al tiempo que tampoco es proporcional a la duración del proceso, las instancias que debieron surtir, así como la labor del profesional del derecho que representaba los intereses de la parte. Por último, expuso que en el particular no son aplicables las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 (f. 301 a 303 Archivo 01 ED Cuaderno C01).

Mediante Auto del 24 de agosto de 2022, el Despacho de primer grado negó la reposición propuesta tras considerar que normativa regulatoria del tema de las agencias en derecho establece criterios de carácter cualitativo y cuantitativo, para que sea el juzgador quien, bajo su discrecionalidad, fije el monto que considere prudente y proporcional de acuerdo con el valor de las condenas reconocidas, teniendo como límite el fijado allí, sin que por ello esté en la obligación de fijar el máximo consagrado. En consecuencia, concedió la apelación propuesta (f. 304 a 305 Archivo 01 ED Cuaderno C01).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante Auto No. 112 del 16 de noviembre de 2022 se dispuso el traslado para alegatos a las partes, sin que ninguna se hubiere pronunciado (Archivo 02 Tribunal).

PROBLEMA A RESOLVER

El problema jurídico que deriva del recurso elevado por la apoderada de la señora **PIEDAD MARÍA LOAIZA MARÍN**, corresponde a determinar si en el presente asunto es procedente o no aumentar el monto de las agencias en derecho liquidadas y aprobadas por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito, y que constituyen la condena en costas, atendiendo los criterios establecidos según el Acuerdo del Consejo Superior aplicable.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo reglado en el numeral 5° del artículo 366 del CGP, el auto atacado es susceptible del recurso de apelación pues sólo a través de ese medio se puede controvertir la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho, de ahí que esta Sala de Decisión sea competente para dirimir el presente asunto, para lo cual, se seguirán los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPTSS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

La inconformidad de la parte demandante radica, principalmente, en que, a su juicio, se debió aplicar el límite máximo fijado en la reglamentación legal aplicable al caso en concreto, respecto de las agencias en derecho aprobadas por el Juez primigenio para la primera instancia.

Para resolver lo anterior, precítese que el artículo 366 del CGP. en sus numerales 2, 3 y 4 establece:

“(...) 2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.

3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.

Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. (...)” (Negrilla y Subraya de la Sala).

En ese orden de ideas, al tenor del artículo 3° del Acuerdo 1887 de 2003, los criterios a tener en cuenta por el operador judicial al momento de establecer el monto de las agencias

en derecho corresponden a: la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias relevantes. Igualmente, en tratándose de asuntos laborales donde resulte victorioso el trabajador, que en el caso puntual se asimila al afiliado, el artículo 2.1.1 ibídem, señala que, en **primera instancia**, las agencias se podrán tasar en los siguientes términos:

“(…) Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(…)

PARÁGRAFO. *Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (…).*

En ese sentido, no debe perderse de vista que si bien el Acuerdo 1887 de 2003, fija unos criterios y tarifas para determinar el monto de las agencias en derecho, este no establece una tasa inamovible para ello, y, en ese caso, como bien lo señaló el Juez de primera instancia, queda al arbitrio del juez decretar el valor de estas, **pues fueron reguladas entre ámbitos mínimos y máximos**, lo que de entrada deja claro que no es una obligación acudir a fijar las agencias en el límite máximo establecido en la reglamentación de este concepto procesal, como erradamente lo entiende la parte actora.

Así las cosas, no existe controversia en el *sub examine* que el tipo de proceso adelantado, a través del cual se procuró el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la señora **PIEDAD MARÍA LOAIZA MARÍN**, es una obligación de tracto sucesivo. Así mismo que la acción fue instaurada el 10 de noviembre de 2015 (f. 23 Archivo 01 ED Cuaderno C01), que correspondió a dos instancias judiciales en sede ordinaria, y por solicitud de la demandada., también se surtió el recurso extraordinario de casación.

En este orden de ideas, al observarse los criterios de la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, entre otros instituidos en el Acuerdo 1887 de 2003, se concluye que las agencias en derecho fijadas en la primera instancia, y que componen las costas, deberán mantenerse incólumes, atendiendo al hecho que el Juez de instancia las estableció por valor de \$8.168.426, cifra que a juicio de la Sala deviene razonable con el tipo de proceso, duración del trámite y las condenas impuestas, aclarándose que la cuantía de este emolumento debe establecerse conforme a la gestión procesal de la **correspondiente instancia**, y hasta el momento en que se profiere la sentencia que la defina, no con base en el tiempo y gestión procesal posterior como lo pretende el recurrente, dado que, para las etapas o instancias subsiguientes, el cálculo se efectúa en su correspondiente oportunidad, bien sea por el Tribunal en segunda instancia o por la Corte Suprema en sede de casación.

Por lo expuesto, se reitera que agencias en derecho tasadas por el juez de primera instancia se encuentran dentro de los baremos establecidos en el artículo 3° del Acuerdo 1887 de 2003, debiéndose confirmar la liquidación de costas aprobada en Auto del 3 de agosto de 2022 a cargo de **PORVENIR S.A.** y a favor de la señora **LOAIZA MARÍN**. Sin lugar a condena en costas en esta instancia.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto del 3 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

TERCERO: Devuélvase por Secretaría el expediente al Juzgado de origen.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Magistrada


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 226 del 15 de diciembre de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>